

## Honduras (Nivel 2)

El Gobierno de Honduras no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; no obstante, está realizando considerables esfuerzos con ese fin. El gobierno demostró que, en general, había realizado mayores esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID 19 respecto a su capacidad de luchar contra la trata; por lo tanto, Honduras se mantuvo en el Nivel 2. Entre estos esfuerzos se encuentra la modificación al código penal, que aumentó las penas por delitos relacionados con la trata, la identificación de un mayor número de víctimas y casi duplicar los fondos disponibles para una ONG que ofrece refugio para víctimas. El gobierno aumentó sus esfuerzos en la identificación de víctimas de trabajo forzoso y el enjuiciamiento de presuntos autores de delitos en materia de trabajo forzoso. El gobierno aprobó un nuevo manual de ayuda a las víctimas y procedimientos operativos estandarizados (POES) para fortalecer el proceso de identificación de víctimas y su remisión a servicios. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) mantuvo sus esfuerzos de proporcionar protección inmediata y coordinar con otros proveedores de cuidados adicionales. No obstante, el gobierno no cumplió las normas mínimas en varios ámbitos clave. El gobierno no asignó los recursos financieros ni humanos apropiados para responder de manera efectiva a los delitos en materia de trata y ofrecer a las víctimas servicios de atención integral en todo el país. El gobierno no informó que hubiera penalizado a ningún empleador ni ninguna agencia de empleo por utilizar prácticas de reclutamiento fraudulentas ni por cobrarles comisiones de contratación a los empleados.

### **RECOMENDACIONES PRINCIPALES:**

Aumentar el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los tratantes, que incluyan a los funcionarios cómplices y autores de delitos en materia de trabajo forzoso • Aumentar el número de capacitaciones para los funcionarios de primera línea sobre la implementación de los nuevos POES para la identificación y remisión de víctimas, que incluyan el tamizaje en busca de indicios de trata entre migrantes y retornados, personas desplazadas por la fuerza y menores detenidos por actividades ilícitas relacionadas con las maras. • Aumentar el financiamiento para la CICESCT y otras instituciones encargadas de implementar las actividades de combate a la trata según lo establece el plan nacional de acción (PNA). • Crear conciencia sobre el reclutamiento fraudulento de empleo en Honduras y en el extranjero y castigar a empleadores o agencias de empleo por prácticas ilegales que facilitan la trata tales como ofertas fraudulentas de empleo o

comisiones ilegales en relación con la migración o la colocación laboral. • Modificar la ley contra la trata de 2014 e incluir una definición de trata de personas congruente con el derecho internacional. • Aumentar e institucionalizar la capacitación sobre el combate a la trata para policías, fiscales, jueces y el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la CICESCT. • Redactar un PNA nuevo que entre en vigor en 2023 y garantizar recursos para su implementación.

## ENJUICIAMIENTO

El gobierno aumentó sus esfuerzos de enjuiciamiento, a pesar de que hizo modificaciones a su ley contra la trata que representaron un retroceso en sus avances hacia la congruencia de la definición de trata con el derecho internacional. El gobierno modificó las disposiciones en materia de lucha contra la trata del código penal de Honduras. Las modificaciones al Artículo 219, que entraron en vigor en noviembre de 2021 y penalizaban la trata con fines de explotación sexual y laboral, aumentaron las penas de entre cinco a ocho años de prisión a penas de entre 10 a 15 años de prisión. Estas nuevas sanciones eran suficientemente severas y, con respecto a la trata con fines de explotación sexual, eran proporcionales a las penas previstas para otros delitos graves como la violación. No obstante, las nuevas disposiciones modificaron la definición de *trata*, lo que generó incongruencias con el derecho internacional, ya que la ley estipulaba que el uso de la fuerza, el fraude o la coacción constituían factores agravantes en lugar de ser elementos esenciales del delito.

El gobierno informó haber investigado 148 casos de trata: 64 casos de trata con fines de explotación sexual (trata sexual) y delitos conexos, cinco casos de trabajo forzoso y 79 casos de explotación no específica. En comparación, en 2020 investigó 82 casos de trata sexual y delitos conexos, y 91 en 2019. Las autoridades iniciaron enjuiciamientos de 43 sospechosos (27 por trata sexual y 16 por trabajo forzoso), en comparación con nueve que iniciaron en 2020 (siete por trata sexual y dos por trabajo forzoso) y 55 en 2019 (53 por trata sexual, incluido el proxenetismo, y dos por trabajo forzoso). El gobierno condenó a 18 tratantes sexuales, en comparación con 14 tratantes condenados en 2020 (10 por trata sexual, dos por trabajo forzoso y dos tanto por trata sexual como por trabajo forzoso) y 34 tratantes condenados en 2019 (33 por trata sexual o proxenetismo y uno por trabajo forzoso). Los tribunales emitieron fallos condenatorios por periodos de tres años con nueve meses a 21 años con cuatro meses para los tratantes condenados y obligaron a algunos de ellos a pagar multas al gobierno. El gobierno investigó a un empleado del Ministerio de Trabajo por su participación en un caso de lavado de dinero y trabajo forzoso de 32 víctimas en un restaurante. Las autoridades acusaron a dicho funcionario por divulgación de información

privilegiada que facilitó delitos de trata. El gobierno no proporcionó información actualizada acerca de investigaciones sobre funcionarios cómplices de delitos de trata que se iniciaron en años anteriores. La corrupción y la complicidad por parte de funcionarios en delitos de trata siguieron siendo temas de considerable inquietud, lo que inhibió las medidas de aplicación de la ley durante el año.

El gobierno mantuvo una unidad especializada de fiscalía contra la trata que incluía investigadores de la policía, con oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. No obstante, expertos observaron que la unidad permaneció sin personal ni recursos suficientes para investigar y enjuiciar a los responsables de delitos de trata, en particular en otras regiones del país. Los contagios de COVID-19 entre policías, jueces, fiscales, abogados defensores, testigos y acusados causaron escasez de personal en las instituciones de aplicación de la ley e interrumpieron el ritmo de los procedimientos judiciales. Una ONG mencionó que los tribunales continuaban retrasando los casos de trata a pesar de que un requisito de la ley contra la trata exige que se tramiten esos casos de manera oportuna, cuestión que se vio aún más agudizada por la pandemia. Expertos observaron que la falta de conocimiento especializado y la experiencia limitada en la tramitación de las causas de trata por parte de los jueces era un impedimento al éxito del procesamiento de los sospechosos y al logro de fallos condenatorios. El Gobierno de Honduras colaboró con el Gobierno de los Estados Unidos en la investigación de un caso de sospecha de trata.

## **PROTECCIÓN**

El gobierno siguió aplicando fuertes medidas de protección y el ERI de la CICESCT brindó asistencia con solidez a las víctimas durante todo el año. El gobierno identificó a 101 víctimas de trata en 2021, entre ellas 48 víctimas de explotación sexual y 53 víctimas de trabajo forzoso. En comparación, el gobierno identificó a 42 víctimas (31 de trata sexual y 11 de trabajo forzoso) en 2020. El gobierno identificó a 75 víctimas (66 de trata sexual y nueve de trabajo forzoso) y ONG identificaron a 78 víctimas en 2019. Entre las víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas por el gobierno se encontraban 35 niñas, 11 mujeres y dos niños, mientras que entre las víctimas de trabajo forzoso se encontraban 22 mujeres, 14 hombres, nueve niños, seis niñas y dos personas LGBTQI+ cuyos género y edad no fueron especificados. Entre estas víctimas podría haberse encontrado a víctimas de delitos conexos como la pornografía infantil. ONG identificaron a otras tres mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Primeros socorristas remitieron para apoyo inmediato a víctimas de trata al ERI de la CICESCT que cuenta con dos psicólogos y dos trabajadores sociales. En enero de 2022, la CICESCT contrató a un abogado para que formara parte del ERI. El ERI brindó a las 101 víctimas servicios de asistencia, entre ellos asesoría jurídica, protección inmediata y servicios psicológicos. La CICESCT coordinó con instituciones del gobierno pertinentes y ONG para brindar servicios adicionales a víctimas, entre ellos asesoría en salud mental, servicios jurídicos, atención médica, alojamiento, alimentación, reintegración familiar y repatriación. Funcionarios informaron que la CICESCT se reunió con otras instituciones más de 120 veces para coordinar servicios para las víctimas y que coordinó con el Ministerio de Salud para administrar pruebas de COVID-19 y vacunas contra la COVID-19 a las víctimas. La CICESCT remitió a 12 víctimas de trata con fines de explotación sexual (ocho niñas y cuatro mujeres) y a 29 víctimas de explotación laboral (15 mujeres, ocho hombres, dos niñas, dos niños y dos personas LGBTQI+ cuyos género y edad no fueron especificados) a refugios del gobierno y de ONG para recibir atención adicional. Las víctimas que eran menores podían recibir atención en refugios del gobierno o de ONG y las mujeres tenían la opción de recibir asistencia en refugios de ONG. En ocasiones el gobierno o las ONG coordinaron alojamiento en hoteles para víctimas hombres adultos. No había refugios especializados para víctimas de trata en Honduras, a los hombres no se los aceptaba en ningún refugio y los servicios para víctimas en las zonas rurales eran limitados en términos de calidad y disponibilidad.

Con apoyo de una ONG financiada por donantes e información proporcionada por sobrevivientes, el gobierno desarrolló y empezó a implementar un manual de asistencia a víctimas con POES para la identificación proactiva de víctimas entre miembros de grupos en riesgo y con procedimientos de coordinación interinstitucional para remitir víctimas a servicios. Como suplemento al manual, las autoridades crearon un plan de asistencia con descripciones detalladas de las necesidades básicas y urgentes de las víctimas, entre ellas la asistencia y el apoyo especializados para sanar del trauma. Estos recursos suplementaron el protocolo intersectorial gubernamental sobre la protección de víctimas y los procedimientos escritos existentes para identificar víctimas y remitirlas para recibir atención. El nuevo manual de atención a víctimas incluyó procedimientos fortalecidos para detectar indicios de trata entre las poblaciones más subrepresentadas, entre ellas las personas con discapacidades, personas indígenas o afrodescendientes, personas LGBTQI+ y personas desplazadas por la fuerza debido a violencia o desastres ambientales. La CICESCT y la unidad de fiscalía contra la trata dirigieron líneas independientes de llamadas específicas para casos de trata. La línea de la CICESCT recibió 32 informes de sospechas de casos de trata y 286 llamadas de

solicitud de información, y ONG informaron directamente a la CICESCT sobre dos casos.

Con financiamiento de organizaciones internacionales, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) del Gobierno de Honduras contrató a 13 funcionarios para la protección de la niñez, quienes cubrían seis puestos de control fronterizos terrestres además del centro de recepción de menores y familias migrantes en San Pedro Sula, para entrevistar a todos los migrantes menores retornados y sus familias. Los funcionarios de protección de la niñez siguieron procedimientos para dar asistencia a menores considerados en riesgo de explotación y para remitir casos posibles de trata a las autoridades de aplicación de la ley para su investigación. El gobierno no informó si funcionarios identificaron a alguna víctima de trata entre los migrantes retornados durante el año. El gobierno siguió un protocolo regional para facilitar la repatriación de víctimas identificadas en el exterior y financió alimentación, transporte y alojamiento para dichas víctimas por medio de un fondo administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. En 2021, el gobierno repatrió y dio asistencia a 20 víctimas hondureñas identificadas en otros países.

El gobierno asignó inicialmente 6,74 millones de lempiras (US \$277.890) a la CICESCT, pero después destinó algunos de esos fondos para financiar esfuerzos de ayuda en la pandemia, lo cual disminuyó su desembolso real a 6,13 millones de lempiras (US \$252.540). Esta cantidad fue comparable con los 6,18 millones de lempiras (US \$254.800) que proporcionó en 2020 y un aumento sobre la asignación presupuestaria de 5,53 millones (US \$228.000) previa a la pandemia en 2019. La CICESCT proporcionó 150.000 lempiras (US \$6.180) a una ONG que operaba un refugio que albergaba a mujeres y niñas y niños hasta de 12 años. Esta cantidad fue casi el doble del financiamiento que proporcionó en 2020 (77.000 lempiras o US \$3.170). No obstante, funcionarios informaron que la ayuda por parte de donantes era esencial para sus labores, ya que los fondos del gobierno eran insuficientes para proporcionar cuidados integrales a las víctimas, comprar equipo de protección personal para las víctimas e implementar el PNA.

El gobierno proporcionó servicios de protección a testigos para algunas víctimas que participaban en investigaciones o enjuiciamientos. Las autoridades permitieron que las víctimas dieran testimonio por medio de declaraciones escritas o entrevistas pregrabadas en alguna de sus cuatro cámaras de Gesell seguras. Miembros del ERI acompañaron a víctimas durante su participación en el proceso de justicia penal y remitieron a algunas víctimas para recibir servicios adicionales de asistencia legal. La legislación de Honduras prohibía el procesamiento de víctimas por actos ilícitos que los tratantes los obligaron a cometer. Sin embargo, el gobierno no contaba con

procedimientos formales para identificar a las víctimas entre los menores detenidos por participar en actividades delictivas relacionadas con las maras. ONG informaron que las autoridades no lograron identificar adecuadamente a menores obligados por grupos delictivos a participar en actividades ilícitas, por lo que informaron que posiblemente el gobierno tratara a dichos menores como delincuentes en vez de víctimas. La ley hondureña permitía a las víctimas extranjeras recibir residencia temporal o permanente con autorización para trabajar, aunque el gobierno no identificó a víctimas extranjeras en 2021.

## **PREVENCIÓN**

El gobierno mantuvo medidas de prevención y una fuerte coordinación interinstitucional. La CICESCT convocó a una red de 32 instituciones del gobierno y ONG y asumió un papel activo en la coordinación de los esfuerzos para combatir la trata por parte del gobierno, incluso por medio de apoyo a comités locales en cada uno de los 18 departamentos de Honduras. El gobierno continuó la implementación de su PNA para el periodo de 2016 a 2022 por medio de actividades para mejorar la identificación de las víctimas y sensibilizar al público sobre los riesgos de la trata. El gobierno no asignó suficientes fondos para la implementación del plan y las entidades pertinentes tuvieron que recurrir a apoyo adicional brindado por donantes extranjeros para llevar a cabo sus actividades. La CICESCT mantuvo una página web pública y cuentas en redes sociales para compartir con el público información sobre la trata de personas e instarlos a denunciar sospechas de casos de delitos relacionados con la trata.

Instituciones del gobierno, entre ellas la CICESCT y el Ministerio Público, llevaron a cabo capacitaciones y eventos informativos en línea y presenciales sobre la prevención de la trata para policías, abogados, jueces, inspectores de trabajo, docentes, funcionarios de salud, profesionales de servicios a víctimas, funcionarios de migración y representantes de ONG. La CICESCT diseñó algunos eventos especiales para grupos en riesgo, entre ellos menores y estudiantes, personas con discapacidades, migrantes, personas indígenas y miembros de la comunidad LGBTQI+. También llevó a cabo actividades para crear conciencia sobre delitos cibernéticos y la trata de personas. El gobierno puso a disposición del público los materiales de dicha campaña en lengua de señas de Honduras.

Inspectores laborales no identificaron ningún presunto caso de trata en 2021. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social llevó a cabo actividades de control y normatividad del cumplimiento de las leyes y políticas laborales que podrían reducir la vulnerabilidad de los trabajadores a la trata, entre ellas la reglamentación de las agencias de empleo privadas, del reclutamiento y contratación de

trabajadores hondureños en el extranjero y del empleo de los grupos en riesgo, como trabajadores domésticos y marineros. Las normativas hondureñas prohibían cobrarles cuotas de reclutamiento a los trabajadores, pero el gobierno no informó haber hecho cumplir esas normativas en 2021. La CICESCT y el Instituto Hondureño de Turismo coordinaron con sus pares regionales para llevar a cabo actividades de prevención del turismo con fines de explotación sexual de menores. El gobierno no informó sobre medidas para reducir la demanda de sexo con fines comerciales.

## **PERFIL DE LA TRATA**

De acuerdo con los informes de los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas locales y extranjeras en Honduras y a víctimas hondureñas en el exterior. Los tratantes explotan a mujeres y menores hondureños por medio de la trata sexual dentro del país y en otros países tales como Belice, El Salvador, Guatemala, México, España y los Estados Unidos. Los tratantes se centran particularmente en hondureños LGBTQI+, migrantes, desplazados internos, personas con discapacidades, menores que hacen trabajo infantil, menores cuyos padres han migrado y personas que viven en zonas controladas por grupos de delincuencia organizada. Funcionarios informan que la pandemia agravó muchos problemas que aumentan estos riesgos como los problemas familiares, el desempleo y la falta de acceso a servicios de salud. Los tratantes explotan a sus víctimas dentro de sus propios hogares o comunidades e incluso a veces son explotadas por sus propios familiares o amigos. Los tratantes explotan a adultos y menores hondureños para que realicen trabajo forzoso en puestos callejeros, mendicidad forzosa, servicio doméstico, tráfico de drogas y en el sector informal en su propio país, así como trabajo forzoso en otros países, en particular en Guatemala, México y los Estados Unidos. Hay menores, entre ellos niños y niñas de comunidades indígenas y afrodescendientes (en particular los niños misquitos), que se encuentran en riesgo de realizar trabajo forzoso en las industrias de la agricultura, construcción, manufactura, minería y hotelería. Los menores que viven en situación de calle están en riesgo de convertirse en víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral. Las organizaciones delictivas, entre ellas las maras, explotan sexualmente a niñas, fuerzan a menores a mendigar en las calles y coaccionan y amenazan a menores y adultos jóvenes a transportar armas, vender drogas, cometer actos de extorsión o servir de vigías. Estos actos ocurrían principalmente en zonas urbanas, pero una ONG informó sobre un aumento en actividades relacionadas con las maras en las zonas rurales. Los delincuentes ampliaron su uso de plataformas de redes sociales para reclutar a sus víctimas, a menudo por medio de promesas de empleo falsas, y siguieron centrándose en

poblaciones vulnerables. Honduras es un país de destino para turistas de Canadá y los Estados Unidos involucrados en la explotación sexual de menores. Los migrantes provenientes de África, Asia, el Caribe, Centroamérica, Oriente Medio y Suramérica que transitan por Honduras en camino a los Estados Unidos son vulnerables de ser explotados como víctimas de la trata. La corrupción y la complicidad de funcionarios ayudaron a facilitar los delitos de trata.